

*tañeda y Nájera.—José M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—José García Ramírez.—Luis Aguilar, secretario.*

Es copia. México, Julio 23 de 1873.—  
*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

## AMPARO

*Promovido ante el juzgado de Distrito de Zacatecas por el Dr. D. Fernando Gomez Virgen, contra la providencia dictada por la Gefatura política de la Capital de ese Estado, en virtud de la que se suspendió al quejoso del empleo de médico de la Municipalidad.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.—El Promotor fiscal dice: que en cuatro del actual se presentó el C. Doctor Fernando Gomez Virgen, por medio del ocuro de fojas cuatro á la seis vuelta, exponiendo: que hace cinco años que le fué conferido el nombramiento de médico de esta municipalidad y administrador de la vacuna, cuyo empleo ha desempeñado con el osmero y eficacia que le ha sido posible hasta el dia primero del presente mes, en que el C. Cruz García Rojas, actual Gefe político del Partido, le impuso la pena de suspension ilimitada de su empleo, como consta de la comunicacion núm. 1; y que el motivo de la aplicacion de esta pena fué, que habiéndosele prevenido por el C. García Rojas, en su comunicacion de 31 de Mayo que acompaña bajo el número 2, para que inmediatamente lo informase del estado en que se encontró la salubridad pública durante el dicho mes, á la que contestó en los términos que constan en la copia número 3, demostrándole que le era imposible rendir inmediatamente el informe que se servia pedirle; y que esa nota fué califi-

cada por dicho Gefe político de irrespetuosa, puesto que en su oficio de primero del corriente, motiva la pena dicha en que no puede permitir el lenguaje desconocido é impropio en que está concebida su contestacion; y aunque puede ser que haya empleado términos que no sean de la mas completa sumision, sin mas objeto que el de conservar incólume la dignidad individual, puede ser tambien que el C. Gefe político haya sido demasiado severo en su calificacion, por ser público en esta ciudad que á su advenimiento al puesto que hoy ocupa, habian mediado algunos antecedentes que lo tenían indispuerto contra su persona; pero que sea de esto lo que fuere, el hecho capital é inegable á que se refiere en su solicitud, es el de habérsele aplicado por el Sr. García Rojas, la pena de destitucion indefinida de su empleo de médico de la municipalidad y administrador de la vacuna, y como con ella se ha violado una de las garantías individuales que protege la Constitucion general de la República, que ratifica y sanciona la particular del Estado en su artículo primero, se ve en el caso, usando del derecho mas legítimo, de ocurrir á la Justicia federal pidiendo amparo contra la determinacion de la Gefatura política que le impuso la pena referida, pues con ella se ha violado la garantía del artículo 21 del pacto fundamental de la República que establece, "que la aplicacion de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial;" cuya determinacion absoluta y caracterizada por el adjetivo "exclusiva," es como el corolario del otro principio fundamental consignado en el artículo 50 que dice: "El Supremo Poder de la Federacion se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial: nunca podrán reunirse dos ó mas de esos poderes en una sola persona ó corporacion, ni depositarse el Legislativo en un individuo;" y que será delincuente si se quiere; pero la pena que deba aplicársele solo puede serlo por la autoridad judicial, pues la privacion de empleo es una pena como lo dicen las mas elemen-

tales nociones de derecho criminal, y que además, tan grave, que produce el doble efecto de atacar ó perjudicar los intereses del individuo á quien se le priva de la honesta ganancia que su empleo le procura, y atacar también el honor por la nota que imprime al que se le impone de ser inepto ó infiel en su desempeño, y que á reserva de desarrollar los puntos de derecho que en esta cuestión se trata, dice: que no se le ha privado de su empleo como principio de un proceso judicial que se inutruya para juzgarlo, de la falta ó delito que le atribuya el Cefe político, sin que pueda estimarse como una de aquellas advertencias ó correcciones que caben en sus facultades, sino que ha sido verdaderamente pena y resolución definitiva, contra la que solo la queda el recurso de amparo.

Alega además, que el reglamento económico-político vigente, de los partidos del Estado, no otorga al C. Gefe político la facultad de imponer la pena de que se queja; y aunque así fuera, y que en virtud de esa ley ó de cualquiera otra del Estado, lo hubiera castigado con la privación de empleo, no por eso sería menos procedente y eficaz el amparo contra la ley misma y contra el acto reclamado, pues que no pierde el carácter de anticonstitucional: que por otra parte, la suspensión de la ejecución de la pena que le ha impuesto, es punto de la mayor importancia y urgencia, porque hiere su reputación y su honor, á causa de la publicidad que tendrá el negocio, por el hecho de que la sociedad lo vea separado de su empleo, sabiendo que es por pena fulminada por la autoridad política; después no le será posible obtener una reparación tan intensa y competente, como es el daño que sufrirá en su honra; por lo que suplica al juzgado se sirva, de conformidad con el artículo quinto de la ley orgánica, decretar la suspensión del acto reclamado; añadiendo, que sin ocuparse de demostrar que no ha cometido ninguna falta, que lo haga acreedor á un castigo de cualquiera especie, no

siendo el punto que deba ventilarse en este juicio, ni la acción que ejercita, el amparo procede por no tener el C. Gefe político autoridad para imponerle la pena que ha dictado en su contra; y por lo mismo, aunque fuera delincuente, no por eso deja de violarse la garantía que le otorga el artículo 21 de la Constitución general; pues como puede comprenderse, esa garantía tiene el objeto secundario de que en materia penal disfruten los acusados ante la autoridad judicial, de las demás que consignan los artículos del diez y ocho al veinticuatro, de las que se verían siempre privados de ellas y se los impusiera un castigo por una autoridad incompetente en la forma que lo ha hecho el C. Gefe político, concluyendo con que su queja se funda en la fracción primera, artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869, y el hecho en que la motiva es el de haberse violado en su persona la garantía citada antes, al imponerle la pena de suspensión indefinida de su empleo; por lo que suplica, que sustanciado el juicio por todos sus trámites legales, se declare en nombre de la Justicia de la Unión que se le ampara y protege contra el acto reclamado.

Suspense dicho acto en 5 del presente, se mandó, de conformidad con los artículos quinto, sexto y noveno de la ley citada, se comunicara la providencia á la autoridad responsable y se le remitiera copia del escrito del quejoso, para que dentro del término de tres días informara con justificación sobre su contenido, corriéndose después traslado al que suscribe para que pida sobre lo principal.

Evacuado por el ciudadano gefe político, en 7 del corriente, manifestó: que es cierto que suspendió á D. Fernando Gomez Virgen del empleo de médico de la Municipalidad, por haberse negado en términos irrespetuosos á dar el informe que se le pidió sobre el estado que guardaba la salubridad pública el mes de Mayo anterior; providencia que cree haber podido dictar conforme

á sus atribuciones, como puede dictarla respecto de cualquiera otro empleado de la municipalidad que no cumpla con sus deberes; y si en la dicha determinacion hubo ó no exceso, el supremo gobierno del Estado ó la asamblea municipal que hizo directa y libremente el nombramiento del Sr. Gomez Virgen, son en su concepto los que pueden y deben calificar la conveniencia ó justicia de la suspension ó remocion de sus empleados, como ya lo ha hecho la Asamblea, destituyendo al citado médico por ineptitud; y no siendo propiedad de nadie los empleos públicos, cuya duracion ninguna ley garantiza, no alcanza á comprender que tengan que ver las garantías individuales con la libre remocion ó nombramiento de un empleado de la municipalidad, independiente en la administracion y manejo de sus intereses, y no es pues cierto que su autoridad haya impuesto una pena al médico D. Fernando Gomez Virgen, pues ni siquiera ha tenido intencion de imponérsela, no obstante haber habido lugar á ello, si tal hubiera querido, pues el artículo sesenta y siete del Reglamento económico político, faculta á la autoridad para hacerlo, y si ha suspendido al Sr. Gomez Virgen, lo ha hecho como á un empleado que no desempeñaba cumplidamente sus deberes, mientras daba cuenta á quien podia reponerlo ó destituirlo, como libre que es la asamblea en el nombramiento de sus empleados, por lo que el juzgado, cuya imparcialidad y justificacion sabrá calificar las pretensiones del Sr. Gomez Virgen, y conciliar lo que piden las garantías individuales y las leyes sus protectoras, con lo que tambien exigen la independencia de los Estados, la soberanía de las entidades federales y la libre administracion y régimen municipal, pues todo ello está bajo la égida de la Suprema Corte de Justicia, que debe calificar en último término la aplicacion de las leyes constitucionales.

Por lo expuesto, y vistos los artículos setenta y cinco y setenta y seis de la Constitucion del Estado, y las fracciones sétima

y novena del artículo treinta del Reglamento económico político de los partidos de 19 de Marzo de 1869; el promotor fiscal cree, que no hay violacion de la garantía que otorga el artículo veintinueve de la Constitucion general, en que funda su solicitud el C. Fernando Gomez Virgen contra el acto del jefe político del Partido que lo suspendió del empleo de médico de la municipalidad y administrador de la vacuna, en virtud de sus facultades y conforme con los artículos citados de la Constitucion del Estado; que segun el primero, ningún empleo público es propiedad del empleado que lo sirve, sino encargo ó comision que durará por solo el tiempo que lo desempeñe; y el segundo que dice: entre el Estado y el empleado que lo sirve, hay solo mútua obligacion de que aquel pague y esto sirva, y cesando el servicio cesa la obligacion del pago; por lo que pide, de conformidad con las disposiciones de la ley orgánica de amparo, se declare que no ha lugar al solicitante por el C. Fernando Gomez Virgen, y de conformidad con el final del artículo diez y seis de la ley citada, imponer al solicitante la multa en que ha incurrido por lo inmotivado de su solicitud.

Zacatecas, 16 de Junio de 1873.—*Jesus M. Licona.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Zacatecas, Junio 23 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por el Dr. Don Fernando Gomez Virgen, contra la órden del C. Jefe político de la Capital, fecha primero del presente mes, en la que, por los términos irrespetuosos de la comunicacion que el quejoso dirigió á la referida autoridad, en 31 de Mayo último, lo suspendió en el empleo de médico de la municipalidad y en la administracion de la vacuna, expresando, que oportunamente daría cuenta á la Asamblea municipal; fundándose el recurso en la violacion de la garantía que prote-

ge el artículo 21 de la Constitución general, por ser la suspensión de empleo una pena que solo puede aplicar la autoridad judicial y no la administrativa como es la Gefatura política, quien no usó de las atribuciones que las leyes le conceden para corregir las faltas de respeto, imponiendo en su lugar una pena que no corresponde á sus atribuciones. Visto el auto en que se mandó suspender provisionalmente la orden contra la que se pide amparo. Visto el informe de la Gefatura política, que dice ser cierto suspendió de su empleo de médico de la municipalidad, á Don Fernando Gomez Virgen, por haberse negado en términos irrespetuosos á dar un informe que se le pedía, providencia que está en sus atribuciones y que puede dictar respecto de cualquiera otro empleado de la municipalidad que no cumpla con sus deberes; y que si en esta determinación hubo ó no exceso, el Supremo Gobierno del Estado, ó la Asamblea municipal, son los únicos que pueden y deben calificar la conveniencia y justicia de la suspensión ó remoción de sus empleados, como ya lo ha hecho la Asamblea destituyendo al citado médico por ineptitud.

Que por lo expuesto, y no habiendo propiedad en los empleos públicos, no hay violación de garantías individuales con la libre remoción y nombramiento de un empleado de la municipalidad que es independiente en la Administración y manejo de sus intereses: que no es cierto se haya impuesto una pena al Dr. Gomez Virgen y ni siquiera haya habido intención de imponérsela, habiendo lugar á ello aplicándole el artículo 67 del Reglamento Económico Político.

Que ha suspendido al quejoso, por que no cumpla con sus deberes, mientras daba cuenta á la Asamblea quien podía restituirlo.

Que en sus procedimientos no ha intervenido la pasión ni los odios políticos, ni ha impuesto una suspensión indefinida, y por último, que el Juzgado podía conciliar lo que piden las garantías individuales, con la libre administración del régimen municipal.

Visto el pedimento del C. Promotor fiscal, que concluye con que no se conceda el amparo, fundándose en que no hay violación de garantías individuales, conforme á los artículos 75 y 76 de la Constitución del Estado y las fracciones sétima y novena del Reglamento Económico de los Partidos, de primero de Marzo de 1869, debiéndose imponer al quejoso la multa que designa el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de dicho año de 1869. Visto el alegato presentado por el Dr. Gomez Virgen, en el que ampliamente desarrolla los puntos de su demanda y combate el pedimento fiscal. Visto el auto de citación para sentencia y todas las demás constancias del juicio.

Considerando: que en el curso del Dr. Gomez Virgen se marca con claridad la usurpación de atribuciones de la Gefatura política.

Que ésta en su informe, no designa ni señala el reglamento ó la ley que la autoriza para suspender á los empleados de la municipalidad.

Que en el sistema constitucional, toda autoridad, tiene sus facultades circunscritas por la ley.

Que el ejercicio de las atribuciones que están fuera de ella, es una usurpación, que constituye, ó la violación de las garantías individuales, ó es simplemente causa de responsabilidad, segun que los hechos ataquen á dichas garantías, ó puramente á los derechos políticos y civiles.

Que la gefatura política de la Capital como parte del poder administrativo, para conservar el orden ó para hacer que se le guarde el respeto debido á su autoridad, solo tiene las facultades correccionales de imponer multas desde uno hasta cien pesos, ó sentenciar á obras públicas por un mes, sustituyendo á estas el arresto conforme á las circunstancias, segun el artículo 67 del Reglamento Económico Político de 5 de Mayo de 1852, declarado vigente en el Estado por decreto de 6 de Febrero de 1870, publica-

do en el número primero del periódico oficial, correspondiente al miércoles 9 del mismo mes.

Que fuera de las correcciones marcadas, la gefatura política no puede imponer otras y menos aquellas que son propiamente penas, porque estas solo pueden aplicarse por la autoridad judicial, previo proceso y guardándose las prevenciones que determinan los artículos 18 y 19 de la Constitución general, formando esta restricción la garantía individual que protege el artículo 21 del citado Código.

Que la gefatura política de la Capital confiesa haber impuesto al Dr. Gomez Virgen la suspensión del empleo de médico de la municipalidad; que dicha suspensión es una pena propiamente tal, porque además de la parte moral que comprende, abraza la pérdida del sueldo, incluyéndose con el referido carácter de pena en la fracción 18 del artículo 92 del Código penal, publicado en 15 de Febrero del año anterior, y cuya disposición están acordes las leyes antiguas y las doctrinas de los autores criminalistas.

Que impuesta por la gefatura política al Dr. Gomez Virgen una pena propiamente tal, en su comunicacion del día 1º del presente, sin estar autorizada por ley expresa, la Orden de la comunicacion referida en que se impone la suspensión del empleo, constituye una violacion clara de la garantía que protege el artículo 21 de la Constitución general.

Que no son de tomarse en consideracion los fundamentos que indica el C. Promotor fiscal, sin aplicarlos á la cuestion, porque no se trata de si el Dr. Gomez Virgen tiene ó no propiedad en el empleo, y por estar derogada expresamente en el Estado la ley de 19 de Mayo (y no de 1º como cita el C. Promotor) de 1869, por la de 6 de Febrero de 1870, sin saber el objeto que tuvo el C. Promotor al hacer sus citas por los pocos renglones que contiene su pedimento, y no dar razon alguna en que se fun-

de. Atendiendo á que el Juzgado de Distrito no promueve de oficio los juicios de amparo; que obra por ministerio de la ley sin calificar la bondad y justicia de los actos reclamados á las autoridades y sin menoscabar las facultades que á estas les conceden la Constitución general y las leyes; de conformidad con los anteriores fundamentos y lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, sentenciando definitivamente este juicio, el Juzgado declara:

Primero: Que la Justicia de la Union ampara y protege al Dr. D. Fernando Gomez Virgen contra la Orden de la gefatura política de la Capital, fecha 1º del presente, por la cual lo suspendió en el empleo de médico de la municipalidad y en la administracion de la vacuna, por violarse con dicha Orden la garantía que protege el artículo 21 de la Constitución general.

Segundo: Se estraña muy seriamente al C. Promotor, por el descuido y falta de estudio que se nota en sus pedimentos y por no haber presentado su alegato, desobedeciendo repetidas ocasiones el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, fecha 9 de Octubre del año próximo pasado.

Tercero: Remítanse en revision estos autos á la referida Suprema Corte; publíquese esta sentencia en el periódico oficial del Estado y sáquense las copias respectivas para el Semanario Judicial. Hágase saber. El C. Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó.—Doy fé.—Firmado.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Es copia que certifico. Zacatecas, Junio 30 de 1873.—*Luis G. Chavez*, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Julio 21 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el C. Juez de Distrito de Zacatecas por el C. profesor de medicina y cirugía Fernando Gomez

Virgen, contra la providencia dictada por la gofatura política de dicha Capital, fecha 19 de Junio próximo pasado, en virtud de la que se suspendió al quejoso del empleo de médico de la municipalidad y en la administración de la vacuna en la misma, con cuya providencia alega el promovente se ha violado en su persona la garantía consignada en el artículo 21 de la Constitución general de la República. Considerando: que la suspensión de empleo y en la administración de la vacuna, impuesta al O. Gomez Virgen por el gofo político de Zacatecas, se ha dictado sin que esta autoridad tenga facultad para ello, puesto que ni el reglamento económico político que él cita, ni en ninguna otra disposición legal se le dá esa facultad, que por su importancia no puede tener el carácter de correccional, única que en uso de sus atribuciones normales pueda decretar y hacer efectiva la autoridad administrativa. artículo 21 citado: que por lo mismo, la gofatura de Zacatecas se ha excedido en sus facultades al mandar suspender al promovente en las funciones á que se refiere en su ocurno de 4 de Junio anterior.

Se decreta: que por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Zacatecas en 28 del pasado Junio, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al O. Fernando Gomez Virgen, contra la Orden de la gofatura política de dicha Capital, fecha 19 de Junio citado, por la cual se suspendió al expresado Gomez Virgen en el empleo de médico de la municipalidad y en la administración de la vacuna, y contra cuya providencia se ha promovido el presente recurso de amparo.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó en revision, acompañándolo testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que

TOMO IV.—PARTE II.

formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Aza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 15 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

## CRIMINAL

*Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Tamaulipas contra D. Nicolás Grijalva, por peculado.*

### PEDIMENTO DEL O. PROMOTOR FISCAL

O. Juez de Distrito:—Al encargarse el O. Crescencio Villca de la Administración principal de correos de esta Ciudad, encontró que el Administrador saliente D. Nicolás Grijalva, estaba en descubierto de una cantidad que al principio se creyó ser de 4,037 pesos 67 centavos, pero que definitivamente resultó ser de 2,824 pesos 99 centavos. En las declaraciones y confesion con cargos, confiesa Grijalva haber tomado la cantidad que faltaba. Plenísimamente comprobado como está el delito, y escrupulosamente seguidos todos los trámites de la causa, falta solo sentenciarla, una vez oída la defensa referente al caso.

El fiscal ha examinado todas las leyes que cita Erericho (voz Peculado) en: unas, como la 14, tit. 14 part. 7ª, se habla de los que administrando maravedis del Rey, no los emplean en lo que debían sino en provecho propio, á que se impone la pena de devolver todo lo tomado con el tres tintos. La 18, tit. 14 part. 7ª, habla de los far-